

HISTORIAS MÍNIMAS REPUBLICANAS

LOS AÑOS DE FUJIMORI

(1990-2000)

JOSÉ RAGAS



CAPÍTULO 6

“Como cuyes son, ahora
no van a tener hijos”

Contra su voluntad

Entre 1996 y 2000, un grupo de personas equipadas con mascarillas, guantes, formularios y material quirúrgico, penetró en numerosas comunidades y pueblos del interior del país, uniéndose al personal de salud que ya atendía en aquellos lugares. Los peruanos apenas comenzaban a adaptarse a una nueva normalidad, con el repliegue de la violencia que había asolado el territorio por más de una década, cuando los forasteros se estaban instalando en los edificios y casas que funcionaban como improvisados centros de salud. Desde ahí, y por varios meses, atrajeron a miles de hombres y mujeres a la sala de operaciones para hacerles ligadura de trompas y vasectomías, impidiéndoles que pudiesen tener hijos en el futuro. Se estima que aproximadamente 272.028 mujeres y 22.004 hombres fueron esterilizados en apenas cinco años, de las cuales 2074 mujeres afirman haber sido intervenidas contra su voluntad, aunque es muy probable que el número sea mayor. Estas acciones formaron parte de un programa gubernamental

denominado Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV en adelante), pero que ha pasado a ser conocido como “esterilizaciones forzadas”. El número preciso, así como el nombre de todos los que formaban parte de este contingente de enfermeras, promotores y cirujanos, son apenas conocidos, lo cual es inaudito considerando su rol en un posible cambio de patrones demográficos en el país.

Este capítulo estudia el caso de las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. Utilizando testimonios de las víctimas y una serie de investigaciones que se llevaron a cabo para desentrañar este hecho, hemos buscado reconstruir el origen de este programa, los mecanismos que permitieron su ejecución y las secuelas que sufrieron y continúan sufriendo las mujeres campesinas y de zonas urbanas que fueron condenadas a renunciar a la maternidad en contra de su voluntad. El que un programa de salud como tal haya sido desarrollado en un lapso de tiempo tan amplio, dirigido a la población rural (en zonas donde no se hablaba español, sino quechua y shipibo), de un perfil socioeconómico pobre y mediante pautas que buscaban proteger a quienes lo llevaban a cabo, revela mucho de los objetivos de quienes diseñaron y ejecutaron estas cirugías.

La meta central era reducir la tasa de crecimiento demográfico en el mediano plazo. En el Programa Nacional de Población, publicado en 1991, el Estado peruano estableció que la tasa de fecundidad debía ser de 3,3 hijos por mujer. Durante la campaña de AQV, la meta oficial era mantener el ritmo de crecimiento a 2% anual, por lo que la propaganda visual desplegada en los

centros de salud proponía una familia “ideal” de apenas cuatro integrantes. Los pueblos y comunidades donde se ejecutó este programa, y a cuyos habitantes se buscaba esterilizar, habían sido duramente golpeados por la violencia política de los años ochenta e inicios de los noventa. Cuando las familias no estaban guardando duelo o velando a quienes habían sido asesinados por Sendero Luminoso o las fuerzas del orden, estaban intentando conseguir información sobre sus seres queridos o sus restos en los cuarteles y dependencias policiales, o en los lugares que servían de botaderos. El haber superado la violencia tampoco garantizaba un mejor futuro, y varios pobladores emprendieron un largo éxodo hacia las ciudades y especialmente a la capital.

Perú no estaba solo en su empeño de reducir su población. En el siglo XX, diversos países habían introducido métodos de control de natalidad, cada uno más cuestionable que el otro, para reducir la fertilidad en un plazo relativamente corto. China había sido uno de los más agresivos al respecto, al imponer por la fuerza la política de un hijo único por pareja, la cual fue revertida solo en 2016 para prevenir el envejecimiento de la población y mantener el crecimiento económico. Si consideramos la orientación hacia los sectores más pobres y étnicamente indígenas, el caso peruano guarda semejanzas con las esterilizaciones que se aplicaron de manera indiscriminada contra afroamericanos en Estados Unidos. En Carolina del Norte, por ejemplo, se implementó un proyecto masivo entre 1929 y 1975 que tuvo como resultado más de 7000 esterilizaciones. Las personas esterilizadas fueron principalmente afroamericanas,

en un momento en que prevalecían las leyes racistas y de segregación conocidas como Jim Crow. Un método similar, también dirigido contra minorías, fue llevado a cabo en la Alemania nazi como parte de un programa racial seudocientífico que permitió intervenir quirúrgicamente a 400.000 personas.

El interés de las autoridades peruanas por el control de la población venía de mucho antes de las esterilizaciones forzadas. La obsesión por monitorear los cambios demográficos se tradujo en una explosión de cifras estadísticas, especialmente de censos locales y nacionales, y en la formación de expertos, con Manuel Atanasio Fuentes a la cabeza. En el primer siglo de vida como país independiente, las autoridades y la opinión pública confiaron en estas cifras para propósitos tan diversos como calcular impuestos, número de votantes y la tasa de criminales arrestados. En ese entonces, la preocupación (que no estaba exenta de un lado eugenésico, como en los años noventa) iba dirigida a fomentar el crecimiento demográfico. El Estado estaba dispuesto a promover ese crecimiento por medio de la inmigración procedente de países europeos y de América del Norte. Con el tiempo, se esperaba que los inmigrantes y sus descendientes desplazaran a otros grupos demográficos, como la población andina y amazónica.

Hacia mediados del siglo XX, el paradigma se había revertido completamente. Los gobiernos que hasta hace poco estaban promoviendo una mayor tasa de natalidad, ahora buscaban limitar el crecimiento demográfico ante una posible pesadilla malthusiana en la que los recursos no pudiesen ser producidos a una velocidad

suficiente. Perú tuvo un rol importante en estos escenarios apocalípticos de sobre población. Durante una estadía en las islas guaneras de Chincha, el ornitólogo norteamericano William Vogt vio en el ciclo vital de las aves lo que podía ser el destino de la humanidad: un declive de la población si no tomaba cartas en el asunto respecto de los recursos disponibles. *Road to survival* (traducido luego como *Camino de supervivencia*), el libro que publicó en 1948 sobre la base de su experiencia en Perú, se convirtió en un clásico instantáneo, además de un llamado de emergencia, y dio lugar al ecologismo como movimiento político y marco de análisis.

Los vaticinios de un crecimiento demográfico descontrolado continuaron rondando las oficinas de ministerios y organismos estatales. Desde los años sesenta, la respuesta de funcionarios y expertos se tradujo en ambiciosos programas de control de la natalidad. La AQV formó parte de esta serie de programas, aunque su aplicación marcó un quiebre respecto de los planes anteriores.

Erradicando la pobreza (y a los pobres)

En su mensaje a la nación de julio de 1995, con la confianza propia de quien acaba de ganar una (re)elección, Fujimori dejó en claro que la planificación familiar sería un aspecto central de su gobierno durante los próximos años.

Si hablamos de futuro tenemos que hablar de planificación o control de la natalidad [...] Por ello el Estado promoverá que las familias de bajos ingresos y de menor nivel educativo, tengan el mismo acceso a los

métodos de planificación familiar con que cuentan las clases de mayores ingresos. Sería una hipocresía hacerse de la vista gorda, sabiendo que se aplican diferentes métodos para familias de diversas clases sociales. Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo, los métodos de planificación familiar.

Por supuesto, esto era solo retórica. Antes que ser un programa democrático, inclusivo y feminista que buscara empoderar a las mujeres para que fuesen “dueñas de su destino”, la AQV adquirió los rasgos propios del régimen fujimorista: un programa jerárquico, vertical y poco flexible, con un objetivo pragmático que dejaba a las personas en un segundo plano, sin posibilidad de defenderse. Envuelto en un discurso social y progresista, el programa fue blindado para no tener que rendir cuentas a la opinión pública ni a posibles entidades fiscalizadoras. Las conferencias que tuvieron lugar en El Cairo (Egipto) y Pekín (China) le dieron la oportunidad al gobierno de legitimar un programa que era precisamente lo opuesto a lo que había proclamado ante organizaciones mundiales y líderes internacionales. En realidad, lo expuesto en ambas conferencias llevaba varios años en preparación. Mil novecientos noventa y uno había sido declarado como Año de la Planificación Familiar y ese mismo año se promulgó el Programa Nacional de Población para el quinquenio 1991-1995, donde se introdujo la AQV como método anticonceptivo.

Las esterilizaciones forzadas fueron presentadas como campañas de planificación familiar. En algunos casos asumían la forma de actividades temporales en las

que se realizarían tanto ligaduras de trompas como vasectomías a quienes se acercasen a los centros de salud. Banderolas de colores y carteles eran colocados en las principales calles y a veces en casas, edificios y balcones, anunciando el inicio y duración de estas actividades con eslóganes como el que se puso en Chanchamayo (Junín): “Gran campaña de vasectomía”. Hubo quienes presentaron estas campañas como “festivales” y “ferias”, tal como ocurrió en Yarinacocha (Ucayali) con el Festival de Ligadura de Trompas y en Cangallo (Ayacucho) con la Feria de Ligadura de Trompas. Una estrategia para atraer a la población era ofrecer el servicio de manera gratuita. Una serie de carteles buscaba concientizar a las familias locales con mensajes a favor de la planificación familiar (“La decisión está en tus manos”), aunque sin indicar el método que debían seguir. Otros anuncios apuntaban más hacia los embarazos no deseados como motivo de preocupación y angustia para las madres y el resto de la familia.

Si bien las autoridades fueron (y siguen siendo) unánimes en indicar que no hubo un sistema de coerción que afectara a los trabajadores de salud en la AQV, los testimonios señalan la existencia de cuotas de personas que debían ser esterilizadas. El personal de salud debía cumplir con mínimos requeridos para asegurar las metas trazadas a escala nacional. E. A. G. D., quien trabajó en el centro de salud de Vilcashuamán, indicó que desde el Ministerio de Salud les hacían llegar una meta de “veinte o treinta pacientes”. Si bien él asegura que no participó de ese sistema, reconoce que se trató de un “programa medio punitivo” contra el personal. Un incentivo perverso para



Imagen 6.1. "Que no te ocurra esto". Anuncio promoviendo la planificación familiar en un centro de salud (Defensoría del Pueblo, *Informe defensorial*, 27, 1999).

cumplir con los objetivos trazados (y evitar posibles quejas) eran las compensaciones económicas que recibían. En un ambiente laboral precario, los trabajadores del Estado tenían pocas opciones ante las amenazas de cese de contratos o despidos. Siempre según el testimonio de E. A. G. D., el Ministerio de Salud les pagaba veinte soles por cada paciente captado en la campaña.

Las cuotas impuestas al personal de salud, y las penalidades que las acompañaban, significaron una enorme presión al momento de llevar a cabo las tareas señaladas. Esto no solo se tradujo en un hostigamiento permanente hacia la población para conseguir que se operase, sino también en una serie de negligencias con graves consecuencias para quienes pasaban por el

quirófano. En ciertas ocasiones, y sin que esto justifique necesariamente su comportamiento con las víctimas de las campañas de esterilización, el personal de salud puso en riesgo sus propias vidas y la de sus familias con tal de cumplir con las cuotas. Una enfermera contratada por el Ministerio de Salud se hizo ella misma la ligadura de trompas para poder cumplir su cuota y no perder el trabajo. Dos meses después, fue despedida. En 1998, Jesús Labán era promotor de salud en Huancambamba (Piura). Debido a su puesto, Labán fue obligado a dar el ejemplo a la comunidad, por lo que tuvo que convencer a su esposa Nemesia Huamán de someterse a la operación. Cuando fue entrevistado en 2015 señaló que "a ninguna familia le aconsejaría que tenga este método [...] porque no ha sido seguro".

Establecidos los parámetros con los cuales debía actuar, el personal de salud comenzó su trabajo en las zonas rurales del país con objetivos y resultados contrarios a los de la salud pública y su juramento como profesionales de la salud.

"Me ligaron a la fuerza [...] en el año de Fujimori"

Los testimonios de mujeres que fueron sometidas a las esterilizaciones forzadas permiten reconstruir lo que fue un procedimiento médico realizado de manera coercitiva y que dejó en ellas una serie de secuelas, tanto físicas como emocionales, de las que muchas no pudieron reponerse jamás. Sus versiones, recogidas en lugares y momentos distintos, dan cuenta de lo similar de los métodos utilizados para llevarlas a la mesa de operación, así

como del desprecio por sus cuerpos durante y después de la intervención. Gracias a estos testimonios, hemos podido reconstruir las diversas fases de una AQV.

El procedimiento comenzaba lejos de la sala de operaciones: en los hogares de las mujeres que iban a ser esterilizadas. Enfermeras como “Julia” solían ser muy inconsistentes, aunque quizás no tanto como las que visitaron hasta cuatro veces en su domicilio a Felicia Ch. T. para convencerla. Si se lograba vencer la resistencia inicial, el personal no siempre respondía las preguntas de las mujeres, o la comunicación por parte de las enfermeras se daba únicamente en español en zonas de población quechuahablante o shipibo-conibo. Algunos reclutadores preferían pasar por alto la consulta a las mujeres y se dirigían directamente a sus esposos o parejas. Cuando Confesora se negó a operarse, los reclutadores ubicaron a Flavio, su esposo, quien estaba ebrio en un bar de Piura y obtuvieron su permiso. En Mollepata (Cusco), se dirigieron a la asamblea comunal, donde hablaron con los esposos y les hicieron firmar el consentimiento. Sus esposas se enteraron solo al día siguiente, cuando las enfermeras fueron a buscarlas para llevárselas.

Las razones que les dieron a las mujeres y sus parejas para convencerlas de ser operadas podían variar, pero se inclinaban hacia el chantaje y la amenaza. Hubo reclutadoras que ofrecieron “hartas cosas” a sus potenciales víctimas, como alimentos (en realidad, bolsas de comida donadas por Estados Unidos a través de Usaïd, su agencia para el desarrollo internacional), e incluso ayudarles a lavar la ropa. Otras no dudaban en restregarles su pobreza al decirles que “te hacemos ligar porque [a] uno que es

pobre no le alcanza para mantener [a] los hijos”. De no operarse, les decían asimismo, pagaría más impuestos y más bien debían “agradece[r] que el gobierno de Fujimori ha ordenado esta ayuda para que no sigan pariendo sin medida”. El esposo de Dolores Q. V. fue amenazado con la cárcel si ella no accedía a dejarse esterilizar. Con Teolinda Rojas, una shipiba de Loreto, ni siquiera se tomaron la molestia de engañarla: la amarraron y la condujeron directamente a la sala de operaciones.

Los consentimientos, que debían ser firmados por la persona a ser intervenida, nunca siguieron un canal regular. Estos fueron firmados aun cuando las parejas eran quechuahablantes y no entendían a los reclutadores —que se comunicaban principalmente en español—, como tampoco la información consignada en los documentos. Esperanza H. A. no sabía firmar ni escribir su nombre, por lo que colocó su huella digital. El esposo de Dolores Q. V. no entendió el documento que le pusieron en frente por ser analfabeto. Algunas parejas llegaban a firmar el consentimiento, como en el caso de Paula H. M. de Cusco, y lo hacían de buena fe, “pensando que todo estaría bien”. Cuando Damiana Barrrientos quiso entablar una denuncia, se encontró con un supuesto consentimiento donde se había falsificado groseramente su firma. Pese a ello, la fiscal adujo que la firma falsificada era válida y buscó archivar el caso. Es muy probable que los demás consentimientos hayan sido inventados de modo posterior por el personal de salud para protegerse de posibles denuncias.

La ausencia de estos consentimientos, o su adulteración, no fue un obstáculo para continuar con el

procedimiento. Las mujeres eran llevadas masivamente en ambulancias y motos a las postas y hospitales. Los testimonios dan cuenta de que para evitar que escaparan, fueron encerradas en cuartos aledaños a la sala de operaciones. Se les dijo que se quitaran la ropa y se les entregó batas, mientras a otras se les daba una ducha de agua fría con mangueras. Dentro de la habitación, algunas se reconocieron y se echaron a llorar de desesperación, mientras golpeaban la puerta y pedían ayuda. Zobeida C. fue una de las pocas que logró escabullirse de su habitación, pero fue interceptada por el personal de salud y llevada a rastras hacia el interior del local, donde fue finalmente operada. Para evitar posibles huidas o amotinamientos, algunas mujeres eran amarradas a la camilla hasta que llegase su turno.

La operación era llevada a cabo luego de que se les administraba la anestesia. En ocasiones, se les practicaba algún tipo de examen (orina o sangre), pero esto era rutinario y no interfería con el procedimiento. Las operaciones fueron realizadas en condiciones inadecuadas, a lo cual hay que sumar el apuro de los médicos por apresurar las cirugías. Algunas sobrevivientes dan cuenta de que la operación fue realizada con premura, llegando hasta el punto de tomar solo media hora. La negligencia de quienes realizaron las intervenciones se comprueba en lo ocurrido con Sabina H. C., quien despertó en medio de la operación sin que los doctores se inmutaran por sus gritos. En un video grabado por el personal de Huaytará (Huancavelica), se puede apreciar cómo operan a Juana Rosa O., mientras ella, aún consciente, gime de dolor. Falleció dos días después.

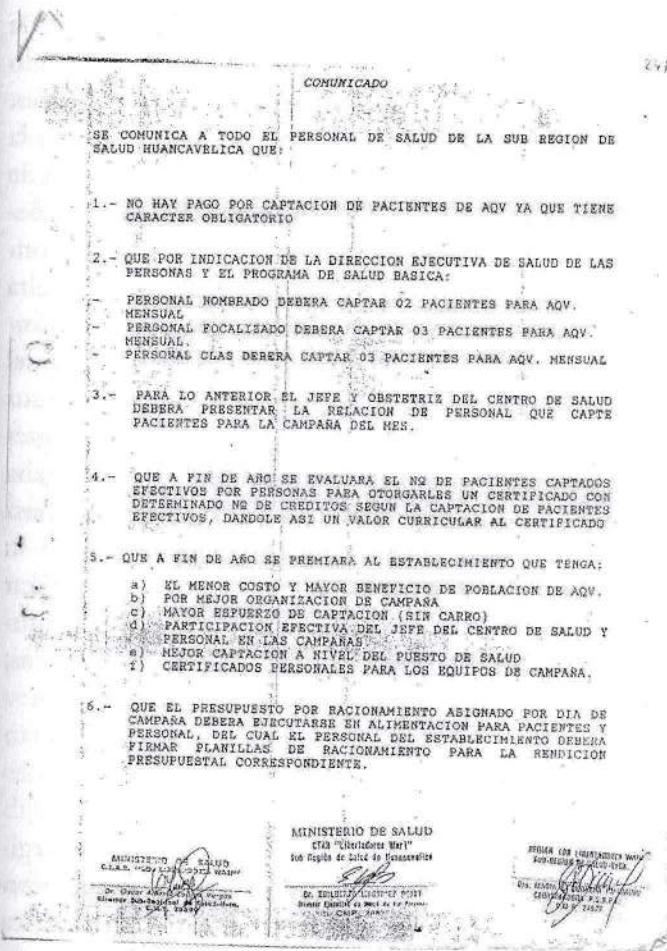


Imagen 6.2. Comunicado dirigido al personal de salud de Huancavelica indicando la obligatoriedad y las cuotas de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) (Archivo del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar).

Ya operadas, las mujeres dejaban de ser sujetos de interés para el personal de salud, el cual había cumplido su propósito. Eran colocadas entonces en otro espacio, no necesariamente acondicionado, para que pasaran la noche en observación, mientras transcurría el efecto de la anestesia. El personal solía irse por la tarde y las dejaba hasta el día siguiente. Después de recobrar la conciencia, se les reunía en grupos y eran enviadas de vuelta a sus hogares y poblados en ambulancias, o llevadas incluso en carretillas, y a veces abandonadas a mitad del camino. Sabina H. C. tuvo que regresar a su casa por sus propios medios, apenas unas horas después de su ingreso a la posta. En el mejor de los casos, se les entregaba “unas pastillitas” para el dolor, que duraban pocos días.

Luego de las cirugías, y antes de continuar con su rotación a otra posta, algunos doctores salían a celebrar el haber cumplido con las cuotas requeridas por las autoridades. Para las mujeres que habían sido esterilizadas, todo esto recién comenzaba.

Evitar el silencio

Las secuelas que dejaron las intervenciones quirúrgicas en las sobrevivientes fueron diversas, y se manifestaron como problemas conyugales, incapacidad física permanente y cuadros de depresión con pensamientos suicidas.

El entorno íntimo de las parejas quedó seriamente dañado debido a una disminución notoria de la libido en ellas. Sumado a una serie de incomodidades provocadas por lesiones que no terminaban de sanar,

esto acababa por crear situaciones tensas al momento de tener relaciones íntimas o cuando ellas se negaban a tener sexo por el dolor que les producía. En su trabajo de campo en Huancabamba (Piura), Alejandra Ballón encontró que 26 de las 28 mujeres entrevistadas habían sido abandonadas por su pareja luego de ser esterilizadas. Solo en algunos casos, ellas encontraron respaldo y comprensión en sus parejas. Pastor Román Peña Pongo, esposo de María Amelia F. C., compartía el pesar de lo ocurrido: “Yo como esposo me preocupo, me siento medio triste [...] no sé qué hacer”. Lo más frecuente, sin embargo, era que las parejas las abandonasen, no sin antes hacerles saber de su frustración por no poder tener más hijos con ellas.

El dolor les impedía asimismo realizar labores que solían hacer en el campo, limitando también su autonomía económica. Con muy contadas excepciones, el personal de salud se desentendió de las mujeres intervenidas cuando estas regresaban para pedir algún calmante o una consulta. A Aurelia Cusi Labra, quien estuvo postrada en cama durante un mes, el doctor le dijo “que estaba bien”. Vicentina Usca Coppa dejó de ir a la posta por medio año, ya que las enfermeras se negaban a atenderla. Los dolores fueron continuos y en ocasiones empeoraron con el tiempo. De trabajar en la chacra y cosechar, tuvieron que resignarse a quedarse en casa a cocinar y cuidar de los hijos, dejando así de percibir ingresos. Felicia Chinguel, de Huancabamba, trabajaba “lampeando, cosechando”, pero dejó de hacerlo por los dolores en la columna. Algunas migraron a

otros pueblos donde intentaron abrir negocios o tiendas de abarrotes desde los cuales despachar, sin que esto les significase un esfuerzo físico innecesario.

El cambio forzoso en los roles de género y actividad laboral entre las sobrevivientes trajo consigo la pérdida de valores comunales e identidad cultural. En Piura, el tejido de telar de cintura es una actividad tradicional llevada a cabo por mujeres. Por años, las tejedoras elaboraron prendas como faldas, ponchos, fajas, mantas y alforjas, principalmente para un mercado local, que iba cambiando según el acceso a las materias primas (lana) y los gustos de cada generación. Las intervenciones dejaron una serie de problemas en las mujeres, impidiéndoles continuar con esta actividad y transmitirla a sus hijas. Ellas dejaron de tejer en la *kallwa* por la fatiga y los problemas de respiración que ahora les causaba el colocarse el telar alrededor de la cintura. En Loreto, a Teolinda Rojas le extrajeron el molar poco después de ser intervenida. Para la comunidad shipiba, de la cual ella forma parte, el molar es importante porque permite a las abuelas masticar el alimento que se les da a los nietos al cumplir nueve meses de vida. Además de haber sido esterilizada, la innecesaria extracción del molar alteró bruscamente una tradición cultural y una forma de vida.

Las denuncias se encontraban con un problema fundamental: la falta de evidencia que corroborase o diese indicios de que las intervenciones habían sido realizadas sin consentimiento de las pacientes o en contra de sus deseos. Como hemos visto, estos consentimientos eran fáciles de adulterar por los servidores públicos. Durante y después de las campañas de AQV los documentos

desaparecieron o fueron destruidos. Johana Vidal, obstetra en Huancabamba, manifestó que los cuadernos donde se registraban las operaciones de ligadura de trompa habían desaparecido. Tampoco estaban las historias clínicas de los pacientes, tal como se lo hicieron saber a Gregorio Pérez Vargas, quien había sido sometido a una vasectomía. Para el director del centro de salud de Vilcashuamán, los responsables de la desaparición de los archivos habían sido los terroristas y no los trabajadores de salud.

El azar hizo que el caso tomara una nueva dirección. En noviembre de 1996, la abogada Giulia Tamayo se topó con las cuotas de captación de usuarias en una vitrina del Centro de Salud de Huancabamba. Comenzó entonces a recoger otros documentos que demostraban la naturaleza coercitiva de dichas cirugías, y que servirían de insumo para las posteriores denuncias. Algunos medios publicaron las denuncias, pero en un entorno periodístico controlado por el gobierno, fue difícil que estas tuvieran impacto en la opinión pública y menos en las autoridades. Las hostilidades hacia quienes expusieron estos casos no se hicieron esperar. Giulia Tamayo se exilió en Madrid luego de recibir amenazas de muerte de grupos paramilitares y de Sendero Luminoso. El médico y futuro congresista Héctor Chávez Chuchón fue despedido, junto con su esposa, del Hospital Regional de Ayacucho cuando regresaba de brindar testimonio sobre las esterilizaciones forzadas en Washington D. C. ante el Congreso norteamericano. En 1998, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones feministas lograron

consolidar finalmente el caso mediante un informe y la sensibilización en el resto del país.

Solo con la caída del fujimorismo se pudo avanzar con el caso en la vía judicial, mientras la opinión pública incorporaba las esterilizaciones forzadas como parte del legado de los años noventa.

Testimonio de Paula Huamán Mollehuanca

“En 1997, una enfermera vino a mi casa y me dijo que fuéramos al Centro de Salud de Izcuchaca para hacerme ligar. Yo le pregunté que si estaba sana para que me puedan ligar y ella no respondió nada. Nos convenció a mi esposo y a mí diciendo que teníamos muchos hijos y que con la ligadura no pasaría nada. Mi esposo y yo aceptamos y firmamos un papel, pensando que todo estaría bien. Nunca me hicieron exámenes previos de ningún tipo. Me llevaron al centro médico, había varias señoras, me amarraron las manos y los pies en una camilla y luego me colocaron una inyección en el brazo.

No recuerdo nada más porque me quedé dormida. Cuando desperté, las señoras que estaban conmigo en ese cuarto gritaban y lloraban, nos llevaron a una ambulancia. Retorné después de una semana para curarme.

Nunca denuncié lo que me había ocurrido. Actualmente, vivo muy mortificada, ya no tengo las fuerzas de antes, no puedo ayudar a mi esposo y me siento muy débil.”

CAPÍTULO 7

“Mary está enferma.
Mary está enferma”

El asalto

El cóctel apenas había comenzado a servirse cuando el ruido de una explosión distrajo a los invitados. El cumpleaños del emperador es una de las fechas más importantes en el calendario diplomático japonés en el exterior —su conmemoración databa del periodo Meiji—, lo cual explica la enorme convocatoria. Todos los invitados recibieron una invitación a nombre del “Embajador de Japón y la Señora de Aoki” y, en caso de no poder asistir, la tarjeta incluía un teléfono “solo para excusas”. Empresarios, embajadores, miembros de las Fuerzas Armadas y de la escena intelectual, además de becarios e integrantes de la comunidad *nikkei*, formaban el grupo de invitados. No solo era un honor recibir la invitación, sino también una oportunidad para establecer contactos, intercambiar información y reforzar vínculos con un país estratégico como Japón. Acostumbrados como estaban a los coches bomba, los invitados pensaron que la explosión aquella noche era una más. Solo los gritos de los emerretistas que entraban a la residencia los sacó

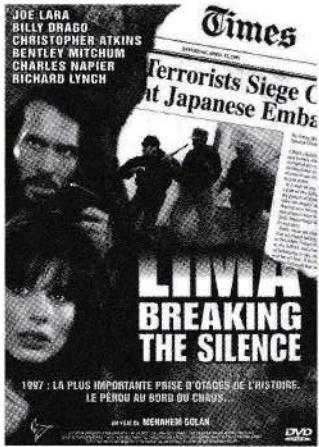


Imagen 7.4. Afiche de la película de Menahem Golan (1999) sobre la toma de la residencia del embajador del Japón por el MRTA.

aparece en traje militar como “Fujimoro” y de él se dice que es “intocable, incluso más que el presidente en Washington”. Uno de los subversivos señala que el país tiene “una de las más sofisticadas policías secretas del mundo entero”, lo cual es un guiño al SIN y a las noticias sobre la represión y eliminación de opositores por esos años. Quizás la escena más delirante es aquella en la cual el líder de los emerretistas baila tango en Nochebuena con una de las rehenes y luego el embajador Aoki hace lo propio con una emerretista. Afuera, un grupo de manifestantes lleva banderolas que reclaman “Diálogo, negociación, rehenes, libertad”. El desenlace ocurre durante un partido de fulbito, pero es el embajador quien se comunica con “Frantacino” para iniciar el ataque a su residencia.

La película puede encontrarse en la plataforma Vimeo.

CAPÍTULO 8

El poder total

Este capítulo estudia cómo el fujimorismo se consolidó como un sistema autoritario. Se trató de un camino más o menos predecible, pero no necesariamente inevitable. El oficialismo había ganado holgadamente la reelección, en el que fue el último proceso electoral sin segunda vuelta hasta la fecha. En realidad, había sido un triunfo muy sencillo, que le evitó extender la campaña, a diferencia de 1990 y 2000. El país estaba pacificado, con la cúpula de Sendero Luminoso encarcelada y el MRTA prácticamente liquidado después de su intentona en la residencia del embajador japonés. Sin embargo, en vez de capitalizar el apoyo recibido entonces, que le hubiese permitido al gobierno realizar las tan necesarias reformas de segunda generación (con reformas institucionales del Estado que acompañaran la economía de libre mercado), el oficialismo se vio consumido por luchas intestinas y una ambición torpe y desmedida.

En los últimos años en el poder, el gobierno utilizó las instituciones públicas y el dinero obtenido de las privatizaciones para concentrar aún más el poder y crear un sistema personalista y autoritario. La cúpula

oficialista copó prácticamente todas las esferas institucionales y sociales, terminando de quebrar la ya delicada separación de poderes para controlar el flujo de información, desde programas periodísticos hasta el consumo de entretenimiento. Fue un periodo completamente desaprovechado, y una más de las oportunidades perdidas del país para emprender un efectivo proceso de modernización y de redistribución de recursos. Si bien el fenómeno de El Niño de 1997-1998 y la crisis asiática complicaron cualquier agenda gubernamental, también es cierto que el gobierno no reaccionó de manera adecuada a dichos desafíos, concentrado como estaba en eliminar a opositores y apropiarse de la esfera pública. Como decíamos, se trató de un régimen autoritario que reprimió y aplastó todo intento interno y externo de disidencia.

Este asfixiante escenario fue respondido con investigaciones periodísticas, denuncias y movilización social, las cuales permitieron romper el cada vez más estrecho cerco informativo oficialista, generando a su vez una contrarreacción violenta hacia la oposición, especialmente a medida que se acercaba la nueva fecha de elecciones. Junto con el garrote, la zanahoria era parte de las estrategias del gobierno para neutralizar a posibles adversarios. Dos ejemplos muy concretos los encontramos en lo que ocurrió con Javier Valle Riestra y Federico Salas Guevara. El primero era aprista (“un advenedizo”, como se definió a sí mismo) y fue invitado a ser premier del fujimorismo en 1998, como una manera de dar una imagen de apertura hacia la oposición. Duró apenas un mes. Salas, por otro lado, era una amenaza.

Como alcalde de Huancavelica, organizó una cabalgata desde esa ciudad hacia la capital con el objetivo de llamar la atención del gobierno central sobre la pobreza rural. Esta hazaña le trajo mucha popularidad, lo que lo llevó a inscribir su partido Perú Ahora. Si bien el propio Salas negó en primera instancia la posibilidad de participar en un eventual gobierno fujimorista (“jamás habría hecho algo igual”), terminó siendo el último presidente del Consejo de Ministros del régimen y el encargado de anunciar que Fujimori no regresaría de Japón (véase el capítulo 9).

La consolidación de este poder no siempre fue rápida, y hubo una serie de tropiezos que expusieron las limitaciones del régimen. Apenas habían terminado de proclamar a Cambio 90-Nueva Mayoría como ganador de las elecciones, cuando comenzó la disputa por las alcaldías municipales y en particular por la de Lima Metropolitana. A escala de gobiernos locales, la de Lima Metropolitana era la plaza más codiciada, no solo por los recursos que manejaba sino también por la visibilidad que le otorgaba a quien ocupara el sillón de Pizarro. Era ya una tradición que el alcalde de Lima Metropolitana tentara la Presidencia de la República luego de terminar su mandato. Pero era una tradición engañosa, por cierto, ya que solo dos exalcaldes habían logrado convertirse en presidentes: Manuel Pardo y Lavalle en 1872 y Guillermo Billinghurst en 1912. Aun teniendo los números en contra, eso no había desanimado a los burgomaestres de intentar mudarse al edificio de al lado, como ocurrió con Luis Bedoya Reyes, Alfonso Barrantes Lingán y Ricardo Belmont Cassinelli.

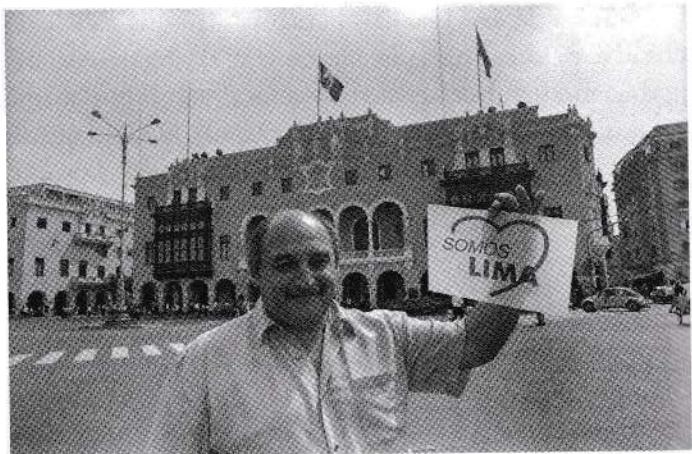


Imagen 8.1. Alberto Andrade, exalcalde de Lima y fundador del partido Somos Perú (*Caretas*, 4 de mayo de 1995).

Ganar la alcaldía de Lima podía ser una oportunidad única para el fujimorismo: consolidaría su dominio territorial y también evitaría tener un posible oponente con miras a las elecciones de 2000. Además, dada la cercanía entre una y otra elección, se podía capitalizar el triunfo presidencial y trasladarlo al eventual candidato a la alcaldía. Pero no todos estaban de acuerdo, entre ellos, Santiago Fujimori, hermano y asesor del presidente. Para él, lo importante era profundizar las reformas del primer gobierno antes que aventurarse en una nueva campaña. Su hermano Alberto, quien ya estaba distanciado de él y limitaba sus conversaciones a la línea telefónica, decidió no escucharlo y procedió a buscar un candidato para la carrera municipal. A diferencia de la campaña presidencial, la municipal no iba a ser sencilla.

El principal contendor era el exalcalde de Miraflores y fundador del partido Somos Perú, Alberto Andrade Carmona.

Por el lado oficialista, el elegido fue Jaime Yoshiyama. Era uno de los personajes más visibles del régimen: había ocupado un par de ministerios y había sido presidente del Congreso Constituyente Democrático (CCD), además de dirigir entidades privadas en la etapa de privatización. Pero Yoshiyama no tenía (ni por asomo) el carisma de Andrade. Su único atractivo era contar con el apoyo del gobierno. Se veía a sí mismo como el sucesor de Fujimori, y buscaba repetir en 1995 la hazaña de 1990: después de todo, él también era ingeniero y de ascendencia japonesa. Los resultados de la elección mostraron el error de haber participado en la campaña municipal, con los independientes copando un número importante de sedes a escala nacional. En Lima, Yoshiyama obtuvo el 48% de los votos frente al 52% de Andrade. Si bien la diferencia no era abismal, su derrota ensombreció el triunfo de la reelección y confirmó lo difícil que sería encontrar a un/a sucesor/a para el presidente en los próximos años.

El gobierno buscó un contrapeso ante la arremetida de independientes en las alcaldías, con el propósito de controlar los recursos y evitar la formación de coaliciones que arruinaran la próxima reelección. Andrade recibió una parte importante de la artillería del gobierno: su antecesor había sufrido un recorte de presupuesto del 80% para reducir sus posibilidades electorales. El Ejecutivo interfirió groseramente en las atribuciones de los gobiernos locales durante los próximos años, siendo uno de los

elementos más importantes el que las municipalidades no tuviesen a su cargo programas sociales como el Vaso de Leche o sus competencias en los asentamientos humanos. De manera simbólica, Andrade mandó colocar un cañón colonial recién encontrado en la plaza de Armas apuntando a Palacio de Gobierno. Los ataques no se limitarían a lo fiscal, dado que el gobierno comenzó a utilizar una nueva herramienta para atacar al burgomaestre: el humor político y la “prensa chicha”.

El Tribunal Constitucional

Los cinco años que siguieron al triunfo electoral de 1995 fueron un asalto a mano armada de las instituciones públicas con un solo propósito: eliminar cualquier barrera legal que impidiese la reelección inmediata de Fujimori, incluso si esto significaba cuestionar la Constitución que tenía apenas dos años de vigencia. El artículo 112 era muy claro al respecto: “El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata”. Y añadía que se podía postular nuevamente, solo después de haber transcurrido un periodo. Pero el oficialismo no quería la alternancia presidencial, de modo que promovió la “interpretación auténtica” de dicho artículo, amparado en el número de sus congresistas. Así, Cambio 90-Nueva Mayoría estableció la narrativa de que dicho artículo admitía una “doble interpretación”, aun cuando la Constitución se había escrito estando el mismo gobierno en funciones, por lo cual el periodo 1995-2000 correspondía a su reelección y 1990-1995 a su primer periodo.

Dada la complejidad del tema, el Tribunal Constitucional intervino y en enero de 1997 declaró dicha ley como “inaplicable”, por lo que el segundo periodo era efectivamente el de 1995-2000. Cualquier intento de postular en 2000 sería inconstitucional y se debía esperar al 2005 para volver a hacerlo. Pero solo tres de los siete jueces (Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry) firmaron la sentencia (los otros cuatro habían adelantado opinión de manera pública), abriendo la posibilidad de que el oficialismo declarase ilegítimo el proceso, al no contar con seis de los siete votos requeridos. Precisamente, los congresistas del oficialismo sostuvieron que los integrantes del Tribunal no habían cumplido con el procedimiento y procedieron a destituir a quienes habían firmado la sentencia adversa a los planes reeleccionistas del régimen. No solo eso: algunos de ellos fueron hostigados, como Delia Revoredo, quien tuvo que enfrentar una acusación de presunto fraude aduanero contra ella y su esposo por la importación de un Mercedes Benz.

La prepotencia con la que el oficialismo vulneró el Estado de derecho generó una reacción popular inédita hasta ese entonces. Se trató de la primera gran movilización contra el régimen fujimorista, que fue posible por la coalición de grupos estudiantiles y los gremios de trabajadores. Tuvo lugar el 5 de junio de 1997 desde la plaza Dos de Mayo, bastión de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), y la plaza Francia, ambas en el centro de Lima. Un cálculo conservador estableció en 7000 el número inicial de manifestantes, aunque luego



Imagen 8.2. Un grupo de personas protesta contra la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional (*La República*, 12 de junio de 1997).

se sumaron jubilados, profesores y transeúntes, además de líderes de los partidos políticos. En una época preinternet y sin redes sociales, los estudiantes se pasaron la voz entre ellos y a través de volantes fotocopiados. Era una convocatoria de universidades privadas y públicas, algunas de las cuales habían estado intervenidas por las Fuerzas Armadas. Utilizaron polos blancos a manera de distintivo y diseñaron pancartas con hojas de papel y cartón para expresar su rechazo al régimen.

La marcha avanzó en dirección al Congreso. El cordón policial establecido en la avenida Abancay para evitar que los manifestantes llegaran a su destino fue roto muy fácilmente, y las bombas lacrimógenas no tardaron en aparecer. Con arengas de “No a la reelección”

y “Aquí, allá, el miedo se acabó”, la multitud se abría paso. La plaza Bolívar fue finalmente ocupada por los trabajadores y se organizó un pequeño mitin, en medio de los enfrentamientos con la Policía. Los manifestantes llegaron hasta el mismo Congreso, donde fueron recibidos por parlamentarios de oposición. Ante el temor por nuevas movilizaciones, la Mesa Directiva del Congreso estableció un cerco perimétrico alrededor de la plaza Bolívar, impidiendo el libre tránsito, lo cual se mantiene hasta el día de hoy.

Un segundo incidente, muy bochornoso, fue el que protagonizó el mismo presidente durante los Juegos Bolivarianos en Arequipa, en octubre de ese año. Todo estaba preparado para que Fujimori diese el discurso de apertura. Incluso se había llenado el Estadio Monumental al repartir 30.000 entradas como parte de los programas de ayuda social del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). Pero el mandatario apenas pudo decir unas cuantas palabras antes de ser abucheado por los asistentes. Keiko, que había acompañado a su padre junto con dos amigas suyas en la comitiva presidencial, solo atinó a decirle: “cálmate, cálmate”. Se levantaron y se dirigieron al Hotel de Turistas, donde habían organizado una recepción. Solo se quedó cinco minutos y se dirigió sin cenar al aeropuerto para abordar el avión presidencial de regreso a Lima. El desaire se tradujo al parecer en una reducción de inversiones del gobierno central en dicha región, especialmente en ferrocarriles y puertos.

Un tercer incidente fue más confuso y desafiante. Tuvo lugar durante una marcha de trabajadores en el

centro de Lima en septiembre de 1998. Para ese entonces, el centro de la ciudad era un espacio acordonado para impedir las marchas que se iban organizando contra el gobierno. Un grupo se desprendió de la marcha central de la avenida Abancay y se dirigió a Palacio de Gobierno. Algunos llevaban pancartas, y en una de ellas se leía: "Reelección es más hambruna y miseria". Durante su trayecto, el grupo atacó violentamente los negocios aledaños, pero lo más extraño fue que pudieron ingresar al patio exterior de Palacio de Gobierno tras un forcejeo con los Húsares de Junín. Luego de trepar las rejas, y sin que hubiese reacción por parte de la seguridad de Palacio, los manifestantes procedieron a saquear e incendiar las pertenencias y uniformes de los Húsares. Según el semanario *Caretas*, se trataba de un grupo coordinado desde el SIN y que buscaba desprestigiar la marcha original.

(Poco) pan y (mucho) circo

El humor, y en especial el humor político televisivo, tuvo en los años ochenta lo más cercano a una "edad de oro". El retorno a la democracia luego de la dictadura militar, el regreso de los medios de comunicación a sus propietarios y las sucesivas elecciones (municipales, parlamentarias y presidenciales) fueron el escenario para que floreciera un número importante de aspirantes, cómicos, caricaturistas, libretistas y productores. Se trataba de un tipo de humor sencillo, basado principalmente en imitaciones de personajes públicos, en las que se acentuaban determinados rasgos físicos o gestuales de aquellos, con

el objetivo de arrancar las carcajadas del respetable, independientemente de que se tratase de un parque público, un local de espectáculos o un set de televisión. Era un humor "criollo", en el que el recurso al contacto físico estaba garantizado, al igual que las bromas subidas de tono, algunas de ellas machistas y homofóbicas.

Aun así, el humor político fue importante para el desarrollo de una corriente crítica en la opinión pública. Además de ofrecer una posibilidad de escape a la presión diaria de crisis económica y terrorismo que asoló esos años, el humor político sirvió como contrapeso a las decisiones gubernamentales, exponiendo lo absurdo de algunas propuestas y cómo perjudicaban a los ciudadanos de a pie. El canal del Estado (en ese entonces relanzado como Televisión Nacional del Perú y con un sospechoso color naranja en su logo) contrató a dos humoristas: Tulio Loza, quien se había hecho conocido con su personaje de "Camotillo, el tinterillo", y Carlos Álvarez, en ese entonces el mejor imitador político. Loza tuvo a su cargo el programa de concursos *Gánate con Tulio*, mientras Álvarez se dedicó a las imitaciones en *Los Álvarez*, transmitiendo una imagen favorable de personajes cercanos al régimen.

No todo el humor crítico fue capturado por el régimen. Desde febrero de 1994, *Los chistosos* ofrecían un respiro. El programa partió de la iniciativa del comediante Guillermo Rossini en Radio Programas del Perú (RPP) e incluía recursos como el radioteatro y posteriormente la participación del público mediante llamadas telefónicas. Pero las imitaciones, que corrían a cargo de Rossini, Hernán Vidaurre y Fernando Armas, eran el

plato fuerte del programa. Otros programas de humor, surgidos de escuelas de clown e improvisación teatral, como *Pataclaun* (1997-1999), se sumaron también al ambiente de crítica abierta al gobierno. En un episodio, mientras Queca y Wendy redactan horóscopos, mencionan que Montesinos tendría un “666” y se ríen a mandíbula suelta sobre el 28 de julio como fecha de nacimiento de Fujimori. Otro episodio, que no se volvió a emitir en señal abierta, hacía alusión a la todopoderosa “Santa Sunat” y a la recesión económica que hacia “que el Perú se esté yendo por un tubo”.

Dos formatos nuevos de estos años serían utilizados, directa e indirectamente, por el régimen y llevaron a un declive aún mayor del contenido de la señal abierta: los cómicos ambulantes y los *reality show*. Hasta entonces, el humor de la calle había estado restringido precisamente a los espacios públicos (principalmente el parque Universitario y la plaza San Martín en la capital) y a eventuales participaciones de algunos de sus representantes en programas como *Trampolín a la fama*. Pero fue la participación en programas más familiares, como el de Mónica Zevallos, donde se hicieron más conocidos y llamaron la atención de otros productores. Los programas donde eran invitados alcanzaban un rating muy notorio y se pensó que un segmento propio podría tener un resultado similar. Para los televidentes de clase media y alta era una forma de acceder a un humor popular desde la comodidad de sus casas y sin interactuar en el espacio público.

Los reyes de la risa, *Los ambulantes de la risa* y *El show de los cómicos ambulantes* fueron algunos programas que

los canales lanzaron al aire. Para los productores, la razón principal de su atractivo era el escaso costo y los bajos sueldos de los humoristas frente a otros espacios con figuras de trayectoria y segmentos más elaborados. Algunos de los programas contaban con producción detrás, otros no. Con el tiempo, los libretos se agotaron y cayeron en lo repetitivo debido a la presión de realizar programas semanales y a la competencia. Después de que terminó su ciclo, algunos de los cómicos (como Kike Suero y Edwin Aurora) señalaron que su paso por la televisión no tenía una agenda política detrás. “Danny” Rosales, en cambio, reconoce que sí cumplieron el rol de “cortina de humo” durante los años noventa, y que “fueron utilizados”, aunque de modo involuntario.

Si bien los cómicos ambulantes no llevaron a cabo un proselitismo abierto, sí lo hubo en el caso del *reality show*, en especial con la conducción de Laura Bozzo. De gestora cultural y regidora municipal, Bozzo dio el salto a la televisión con un programa de conversación llamado *Las mujeres tienen la palabra*. En ese entonces, era una crítica acérrima del gobierno y de la reelección de 1995, con invitados como César Hildebrandt. En una ocasión, su programa fue interrumpido por un corte de energía, precisamente mientras entrevistaba a Luis Cisneros Vizquerra, un militar que se oponía al régimen. Se cree que el sabotaje estuvo a cargo de los servicios de Inteligencia. Esta imagen de crítica del gobierno dio un rápido giro de adulación al poder. *Laura en América* era una propaganda abierta al fujimorismo, disfrazada de asistencialismo y paternalismo. Algunos de sus programas son recordados precisamente por lo repugnante

de las temáticas. En el capítulo de uno de ellos (“Haría cualquier cosa por dinero”), una mujer debía lamer las axilas y los pies de un hombre que había estado realizando ejercicios durante una hora.

El programa explotaba la precariedad de los sectores populares para venderlo como entretenimiento en señal abierta. Bozzo era vista como alguien benévolamente se preocupaba por sus invitados, cuando el propósito último era conseguir más audiencia y con ello un contacto cercano con el poder, especialmente con Montesinos, de quien dijo estar enamorada. Esto le dio acceso ilimitado a privilegios e información, lo cual la llevó a conducir programas especiales con miras a la campaña de 2000. Uno de ellos fue sobre la captura del “camarada Feliciano”, donde llamaba a Fujimori “un ejemplo para el mundo” y “el artífice de la planificación”. Otro programa especial, titulado *Colombia al borde del abismo*, había sido previamente coordinado entre Montesinos y los directivos de Canal 4, con el propósito de levantar la imagen del SIN y las Fuerzas Armadas.

Los medios de comunicación y la “prensa chicha”

El periodismo de investigación y la autonomía de los medios de prensa se convirtieron en un dolor de cabeza para el gobierno. No es solo que aparecieron nuevas denuncias que ponían en duda la lucha contra el narcotráfico, el rol del asesor presidencial e incluso la nacionalidad del presidente, sino que se profundizó en hechos que venían del primer periodo y que se pensaba habían sido silenciados. La prensa fue objeto de los

ataques del régimen, y cuando no pudieron comprar o chantajear a sus dueños o algunos periodistas, decidieron recurrir a métodos familiares como la intimidación.

Varios periodistas sufrieron represalias o estuvieron expuestos a amenazas tan solo por investigar y hacer públicas denuncias que el régimen buscaba acallar. En 1991, cuando se desencadenó una serie de ataques con “sobres bomba”, la periodista pucallpeña Melissa Alfaro murió como consecuencia de los explosivos que estaban en el interior de un sobre. Ella trabajaba en el semanario *Cambio*, un medio que solía publicar denuncias relacionadas con la violación de derechos humanos. En 1997, un plan para eliminar a César Hildebrandt trajo de regreso al infame Grupo Colina, cuando el cuerpo de una integrante de ese destacamento, Mariela Barreto, fue hallado descuartizado en una carretera de Canta. Barreto había filtrado los pormenores del “Plan Bermuda” que buscaba eliminar a Hildebrandt. En mayo de 2000, el periodista Fabián Salazar Olivares fue atacado y torturado por cuatro asaltantes en su propia oficina en Lima. Estos buscaban material que le había sido entregado al periodista y que incriminaba a Montesinos, a miembros del JNE, periodistas y directivos de empresas encuestadoras.

Entre quienes mantuvieron una postura crítica contra el régimen fujimorista se encontraba Cecilia Valenzuela. Como muchos de sus colegas, ella también había recibido una serie de amenazas sobre el caso La Cantuta: le hicieron llegar una foto ensangrentada junto con la cabeza de un pollo muerto. En otra oportunidad recibió un documento con membrete del Congreso que decía: “Te vas a morir, perra”. Valenzuela pudo devolver el

golpe algunos años después, cuando publicó una investigación en *Caretas* (1997) en la que se ponía en duda la fecha de nacimiento, y, por ende, la nacionalidad de Fujimori. Por cuatro años, la reportera reunió una serie de materiales y documentos que daban cuenta de información no siempre precisa sobre el lugar y la fecha de nacimiento que el mismo Fujimori había declarado. Luego de hacerse pública la denuncia, el presidente mantuvo silencio mientras el aparato oficialista buscaba desacreditar y minimizar la investigación. La cordial acogida que ofreció Japón al prófugo Fujimori tres años después confirmó que estas sospechas eran verdaderas.

Los canales representaban un desafío más complejo, y la mejor forma de presionarlos, cuando no respondían a las amenazas, era mediante el aparato legal. El empresario Baruch Ivcher experimentaría pronto esto, cuando mediante una serie de argucias legales, sería despojado del canal del cual era accionista mayoritario. Al parecer, el detonante fue la emisión del testimonio del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”, quien hacía una serie de acusaciones contra el asesor presidencial. Además, el programa periodístico *Contrapunto* había realizado una serie de reportajes que dejaban muy mal parado al gobierno. Uno de los más sonados fue la emisión del testimonio de la agente de Inteligencia Leonor La Rosa, compañera de Mariela Barreto, quien señaló haber sido torturada. Otros reportajes, como el que apuntaba a los ingresos de Montesinos, terminaron por sellar la suerte del canal y de Ivcher. Este fue despojado de su nacionalidad peruana, y posteriormente del control del canal, el cual fue transferido

a los hermanos Samuel y Mendel Winter, accionistas minoritarios.

El ilegal traspaso trajo consigo la renuncia de treinta periodistas del canal, dejando un vacío en los espacios de investigación y denuncia contra el oficialismo. La transferencia de la propiedad de los canales a socios minoritarios, y que colaboraban más con el régimen, volvió a darse con Canal 13. Otros programas periodísticos siguieron un rumbo similar, siendo obligados a desaparecer o alineándose con el discurso oficialista.

Aun así, con el propósito de contrarrestar una cada vez más creciente influencia de la prensa y copar los medios informativos, el gobierno creó un sistema de periodismo paralelo que tuvo como objetivos centrales atacar a los opositores y generar una imagen favorable de sí mismo. Se le conoció como “prensa chicha” y fue uno de los legados más deplorables del fujimorismo. Se trató de una maquinaria de demolición pública, que empleó fondos públicos para financiar a los nuevos gerentes y periodistas. En total, se estima que se desviaron cerca de 122 millones de soles de ese entonces para crear y sostener una línea editorial controlada por el SIN y afín al gobierno. Las portadas tenían un precio de 3000 a 4000 dólares, lo cual llevaba a los editores a hacerlas más escandalosas y estridentes. Una página completa de ataques contra los enemigos podía llegar a los 5000 dólares, mientras que las notas interiores de menor tamaño eran recompensadas con 500 dólares.

El Mañanero, El Chino, La Chuchi, El Chato y Diario Más fueron apareciendo con el auspicio del gobierno y en especial del SIN. Estos diarios se encargaban de



Imagen 8.3. Prensa chicha (@hurgamemoriaPE).

atacar de manera anónima a una serie de personajes y políticos opuestos a la línea oficial. Los insultos combinaban indicios infundados con comentarios homofóbicos. Adoptando la forma de prensa popular, que había aparecido a mediados del siglo pasado con diarios como *Ojo*, *La Crónica*, *Última Hora* y *Extra*, sus contrapartes noventeras eran vendidas al público a un precio muy bajo. Aun si no eran adquiridos, los diarios "chicha" explotaron las portadas estridentes y efectistas al ser expuestos en los quioscos y leídos por quienes buscaban las noticias del día. Las caricaturas, por otro lado, exageraban una serie de rasgos físicos de los opositores, llegando al punto de deformarlos o de descontextualizar sus declaraciones. Toledo fue uno de los objetivos de

las caricaturas de estos diarios, a quien insistieron en atribuirle un perfil de mentiroso para así desestimarlo.

Desde el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, ningún otro régimen había tenido tanto control de los medios de comunicación y de la información. El fujimorismo contaba ahora con una presencia importante en la prensa escrita, la televisión e incluso el cable. La trituradora gubernamental comenzaba también a incursionar en la naciente internet. Tenía a su servicio conductores, además de humoristas y caricaturistas, que hacían el trabajo sucio mientras las autoridades proclamaban a viva voz que el país gozaba de libertad de prensa. Había bolsones de autonomía, tanto en las calles como en las instituciones y algunos medios, pero estos se encontraban cercados por la abrumadora presencia oficialista y las amenazas que podían caer sobre ellos. Aun así, se podían comenzar a ver las fracturas internas que harían que este sistema se derrumbase al intentar extender su poder por cinco años más.

Poderes ocultos

Un aspecto poco conocido del estilo presidencial fue la estrecha relación entre Fujimori y lo sobrenatural. A lo largo de todo su periodo, se rodeó de brujos y adivinas que le ayudaron a tomar decisiones en momentos difíciles: la campaña electoral, el cierre del Congreso y la ubicación de Montesinos en los días finales de su gobierno. Una de sus primeras consultas con una adivina

se dio en sus tiempos de docente en la UNALM, cuando estaba interesado en postular al decanato. Esta le pronosticó: “Vas a ser rector más fácil que decano”, lo cual se cumplió poco después. “En varios casos importantes las adivinas han acertado en mi destino”, señaló el propio Fujimori en una entrevista. Es posible que se haya tratado de Carmela Polo Loayza, conocida como “Madame Carmeli”, quien le fue presentada por uno de sus estudiantes. Ella se especializaba en hierbas medicinales y provenía de Quillabamba (Cusco). Durante la sesión, la adivina no solo le predijo que él ganaría el rectorado, sino también la Asamblea Nacional de Rectores y la Presidencia de la República. Años después, Fujimori la incluyó en la lista de candidatas al Congreso, lo cual fue señalado por Vargas Llosa en el debate, ya que “Madame Carmeli” tenía investigaciones por narcotráfico. Si bien la adivina no llegó al Congreso, tuvo un rol más importante cuando Fujimori la mandó traer en un helicóptero militar desde Quillabamba a las oficinas del SIN en los días previos al autogolpe de abril de 1992. El encargado del traslado fue Santiago Martín Rivas.

CAPÍTULO 9

“Nos jodimos”

El inicio del fin

En algún momento de ese jueves 14 de septiembre, Alberto Fujimori debió darse cuenta de que todo había terminado. La difusión de un video donde aparecía Vladimiro Montesinos entregando dinero a un congresista para que se cambiara de bancada sorprendió a la opinión pública y al mismo gobierno. La conversación no dejaba dudas de lo ilícito de la transacción y de la identidad de los involucrados. Por una década, Montesinos y Fujimori habían podido neutralizar cualquier denuncia que significase una amenaza para alguno de ellos. De hecho, la alianza Fujimori-Montesinos había nacido precisamente a raíz de la habilidad de este último para desestimar una denuncia en la campaña electoral de 1990, que ponía en peligro el triunfo del primero en la segunda vuelta. Con los años, ambos aplastaron cualquier acusación de narcotráfico, presunto origen japonés, esterilizaciones forzadas y violación de derechos humanos que se presentase en el camino. Pero ahora era distinto. La evidencia era imposible de negar.